

Radical Radio y Otros vs. Chirilagua

ESTADO DE CHIRILAGUA

2) Índice

Sección	Página
<u>1) Portada</u>	I
<u>2. Índice</u>	II
<u>3. Bibliografía</u>	IV
3.a) Documentos Legales	IV
3.a) Libros y Documentos Legales	IV
3.a.i) Libros	IV
3.a.ii) Documentos Legales	V
3.b) Casos Legales	V
3.b.i) Corte Interamericana de Derechos Humanos	V
3.b.i.a) Opiniones Consultivas	V
3.b.i.b) Casos contenciosos	VIII
3.b.ii) Comisión Interamericana de Derechos Humanos	XIV
3.b.iii) Comisión Interamericana de Telecomunicaciones	XVI
3.b.iv) Tribunal Europeo de Derechos Humanos	XVII
3.b.v) Corte Internacional de Justicia	XVII
3.b.vi) Unión Internacional de Telecomunicaciones	XVIII
3.b.vii) Comité de Derechos Humanos	XVIII
3.b.viii) Tribunal Penal Internacional para Ruanda	XVIII
<u>4. Exposición de los hechos</u>	1
<u>5. Análisis legal del caso</u>	4
5.a) Análisis de los aspectos preliminares de admisibilidad	4
5.a.i) Excepción preliminar de cuarta instancia	4

<u>5.a.ii) Excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos en la jurisdicción interna</u>	6
<u>5.a.iii) Incompetencia de la Corte <i>ratione personae</i> respecto de Radical Radio y Radio Su-</u> <u>Versión</u>	9
<u>5.a.iv) Incompetencia de la Corte <i>ratione personae</i> respecto de la población de Chirilagua</u> ..	11
<u>5.b) Análisis de los asuntos legales del caso</u>	12
<u>5.b.i) Chirilagua no violó el artículo 13 en relación con el 1.1 y 2 de la Convención</u>	12
<u>5.b.i.a) Chirilagua no violó los artículos 13.1 y 13.3 de la Convención con relación a la</u> <u>cancelación de la licencia a Radical Radio y el cierre de Radio Su-Versión</u>	13
<u>5.b.i.b) Chirilagua no violó los artículos 13.1 y 13.2 de la Convención con relación a las</u> <u>condenas por los delitos de difamación e instigación a delinquir</u>	16
<u>5.b.ii) Chirilagua no violó el artículo 24 en relación con el 1.1 y 2 de la Convención</u>	23
<u>5.b.iii) Chirilagua no violó el artículo 21 en relación con el 1.1 y 2 de la Convención</u>	24
<u>5.b.iv) Chirilagua no violó los artículos 7, 8 y 25 en relación con el 1.1 de la Convención</u>	26
<u>6. Petitorio</u>	30

3) Bibliografía

3.a) Libros y Documentos Legales

3.a.i) Libros

- AA. VV. *Estudios Básicos de Derechos Humanos*, Tomo X, San José, 2000, p. 22.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. *La Corte Interamericana de Derechos Humanos: un Cuarto de Siglo 1979-2004*, San José pág. 126, p. 12.
- Fiss, Owen. *El Efecto Silenciador de la Libertad de Expresión*, ISONOMÍA No. 4, abril 1996, p. 23.
- Fiss, Owen. *Liberal Democracy and the Limits of Tolerance*, In Honor and Memory of Yitzhak Rabin. R. Cohen-Almagor, ed., 2000, p. 22.
- García Ramírez y Alejandra Gonza. *La libertad de Expresión en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, Comisión de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 2007, p. 12.
- Gros Espiell, Héctor. *Responsabilidad del Estado y Responsabilidad Penal Internacional en la Protección Internacional de los Derechos Humanos*, en AA.VV., *Fix-Zamudio, Héctor, Liber Amicorum* Vol. I, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, 1998, p. 5.
- Instituto Interamericano de Derechos Humanos. *Libertad de Expresión en las Américas*. San José de Costa Rica. 2003 p. 24.
- Medina Quiroga, Cecilia. *La Convención Americana: Teoría y Jurisprudencia. Vida, Integridad Personal, Libertad Personal, Debido Proceso y Recurso Judicial*, Universidad de Chile, Santiago, 2003, p. 26.
- Pasqualucci, Jo M. *Preliminary Objections Before The Inter-American Court Of Human Rights: Legitimate Issues And Illegitimate Tactic*, Virginia Journal of International Law Association, 1999, p. 5.

- Rodríguez Rescia, Víctor Manuel, “El Debido Proceso Legal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, en AA.VV., *Fix-Zamudio, Héctor, Liber Amicorum* Vol. II, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, 1998, p.26.

3.a.ii) Documentos Legales

- Asamblea General de la OEA, *Convenio Interamericano sobre Permiso Internacional de Radioaficionado*, entrada en vigor el 23 de febrero de 1996, p.13.

- Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, p.13.

- *Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión*, de los relatores en libertad de expresión de la OEA, Naciones Unidas, África y Europa, diciembre de 2007, pp.13 y 14.

- *Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión*. Adoptada en su 108° período ordinario de sesiones en octubre de 2000, pp. 12 y 24.

- *Declaración de Chapultepec*. Adoptada el 11 de marzo de 1994, p. 24.

- *Principios de Johannesburgo sobre seguridad nacional, la libertad de expresión y el acceso a la información*, aprobados por el Relator Especial para la Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, en en sus informes a las sesiones de 1996, 1998, 1999 y 2001 de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, pp. 21 y 22.

3.b) Casos Legales

3.b.i) Corte Interamericana de Derechos Humanos

3.b.i.a) Opiniones Consultivas

- Corte IDH, *"Otros Tratados" Objeto de la Función Consultiva de la Corte* (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie A No. 1, p. 9.
- Corte IDH, *El Efecto de las Reservas sobre la Entrada en Vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*. Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie A No. 2, p. 7.
- Corte IDH, *Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización*. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, p. 24.
- Corte IDH, *La colegiación obligatoria de periodistas* (art. 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, pp. 12 y 13.
- Corte IDH, *La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, p. 30.
- Corte IDH, *Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta* (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986. Serie A No. 7, p. 12.
- Corte IDH, *El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías* (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, p. 30.
- Corte IDH, *Garantías Judiciales en Estados de Emergencia* (arts. 27.2, 25 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-09/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, pp. 8 y 26.

- Corte IDH, *Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*. Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989. Serie A No. 10, p. 23.
- Corte IDH, *Excepciones al agotamiento de los recursos internos* (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990. Serie A No. 11, pp. 8 y 26.
- Corte IDH, *Compatibilidad de un Proyecto de ley con el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*. Opinión Consultiva OC-12/91 del 6 de diciembre de 1991. Serie A No. 12, p. 26.
- Corte IDH, *Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos* (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993. Serie A No 13, p. 17.
- Corte IDH, *Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención* (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, p. 5.
- Corte IDH, *Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados*. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, pp. 23, 24 y 29.
- Corte IDH, *Control de Legalidad en el ejercicio de las atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos* (arts. 41 y 44 a 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-19/05 del 28 de noviembre de 2005. Serie A N° 19, p. 7.
- Corte IDH, *Artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*. Opinión Consultiva OC-20/09 de 29 de septiembre de 2009. Serie A No. 20, p. 23.
- Corte IDH, *Asunto de Viviana Gallardo y otras*. Serie A No. G 101/81, pp. 4 y 7.

3.b.i.b) Casos contenciosos

- Corte IDH, *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, pp. 6 y 7.
- Corte I D H, *Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, pp. 6 y 7.
- Corte IDH, *Caso Godínez Cruz Vs. Honduras*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3, pp. 6 y 7.
- Corte IDH, *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, p. 8.
- Corte IDH, *Caso Godínez Cruz Vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, p. 8.
- Corte IDH, *Caso Fairén Garbi y Solís Corrales*. Fondo. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6, p. 7.
- Corte IDH, *Caso Gangaram Panday Vs. Surinam*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de diciembre de 1991. Serie C No. 12, p. 7.
- Corte IDH, *Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 11 de diciembre de 1991. Serie C N° 13, p.7.
- Corte IDH, *Caso Gangaram Panday Vs. Surinam*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 21 de enero de 1994. Serie C N° 16, p. 30.
- Corte IDH, *Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C N° 17, p. 8.
- Corte IDH, *Caso Castillo Páez Vs. Perú*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 30 de enero de 1996. Serie C No. 24, p. 7.
- Corte IDH, *Caso Loayza Tamayo Vs. Perú*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 31 de enero de 1996. Serie C No. 25, p. 7.

- Corte IDH, *Caso Blake Vs. Guatemala*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 2 de julio de 1996. Serie C No. 27, p. 9.
- Corte IDH, *Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, p.28.
- Corte IDH, *Caso Castillo Páez Vs. Perú*. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, p. 27.
- Corte IDH, *Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador*. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, p. 28.
- Corte IDH., *Caso Durand y Ugarte Vs. Perú*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 28 de mayo de 1999. Serie C No. 50, p. 8.
- Corte IDH, *Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, p. 26.
- Corte IDH, *Caso Cesti Hurtado Vs. Perú*. Fondo. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C No. 56, p. 26.
- Corte IDH, *Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala*. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, p. 29.
- Corte IDH., *Caso Durand y Ugarte Vs. Perú*. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, p. 30.
- Corte IDH., *Caso Cantoral Benavides Vs. Perú*. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, p. 8.
- Corte IDH, *Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala*. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, pp. 29 y 30.
- Corte IDH, *Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, p. 26.

- Corte IDH, *Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, pp. 26 y 28.
- Corte IDH, *Caso “La Última Tentación de Cristo”(Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, p. 12 y 13.
- Corte IDH, *Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, pp. 8, 9, 13, 19, 24 y 25 .
- Corte IDH, *Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, p. 29.
- Corte IDH, *Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, pp. 8.
- Corte IDH, *Caso Cantos Vs. Argentina*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de septiembre de 2001. Serie C No. 85, p. 10.
- Corte IDH, *Caso Las Palmeras Vs. Colombia*. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90, p. 9.
- Corte IDH, *Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94. p. 28.
- Corte IDH, *Caso Cantos Vs. Argentina*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de Noviembre de 2002. Serie C No. 97, p. 26.
- Corte IDH, *Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, pp. 9 y 25.
- Corte IDH, *Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, p. 29.
- Corte IDH, *Caso Bulacio Vs. Argentina*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100, p. 29.

- Corte IDH, *Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, p. 30.
- Corte IDH, *Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, p. 27.
- Corte IDH, *Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, pp. 7, 12, 13, 17, 18, 19 y 29.
- Corte IDH, *Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, p. 27.
- Corte IDH, *Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, pp. 4, 12, 13, 17, 18, 19 y 28.
- Corte IDH, *Caso "Instituto de Reeducción del Menor" Vs. Paraguay*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, pp.10 y 11.
- Corte IDH, *Caso Tibi Vs. Ecuador*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, p. 27.
- Corte IDH, *Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 de noviembre de 2004. Serie C No. 118, p. 8.
- Corte IDH, *Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, p. 26.
- Corte IDH, *Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de marzo de 2005. Serie C No. 120, pp. 27 y 30.
- Corte IDH, *Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, p. 27.

- Corte IDH, *Caso Yatama Vs. Nicaragua*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, pp. 23.
- Corte IDH, *Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, p. 27.
- Corte IDH, *Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, p. 8 y 24.
- Corte IDH, *Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, p. 27.
- Corte IDH, *Caso Palamara Iribarne Vs. Chile*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, pp. 12, 13, 19, 24, 26 y 28.
- Corte IDH, *Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, p. 8.
- Corte IDH, *Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, p. 27.
- Corte IDH, *Caso López Álvarez Vs. Honduras*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, p. 26.
- Corte IDH, *Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, p. 10.
- Corte IDH, *Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, pp. 11 y 24.
- Corte IDH, *Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, pp. 12, 13, 17, 18, 20, 27 y 28.
- Corte IDH, *Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, p. 11.

- Corte IDH, *Caso Vargas Areco Vs. Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155, p. 6.
- Corte IDH, *Caso Nogueira de Carvalho y otro Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares y Fondo. Sentencia de 28 de Noviembre de 2006, p. 7.
- Corte IDH, *Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, pp. 11, 20 y 26.
- Corte IDH, *Caso Kimel Vs. Argentina*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, pp. 12, 13, 17, 18, 19 y 20.
- Corte IDH, *Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador*. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179, p. 24.
- Corte IDH, *Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, pp. 11, 13, 26 y 28.
- Corte IDH, *Caso Tristán Donoso Vs. Panamá*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193, pp. 17, 18, 19, 20 y 28.
- Corte IDH, *Caso Ríos y otros Vs. Venezuela*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, pp. 7, 8, 11 y 13.
- Corte IDH, *Caso Perozo y otros Vs. Venezuela*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, pp. 7, 8, 10, 11, 13 y 24.
- Corte IDH, *Caso Kawas Fernández Vs. Honduras*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, pp. 11 y 27.
- Corte IDH, *Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, pp. 7 y 27.

- Corte IDH, *Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No. 198, p. 7.
- Corte IDH, *Caso Escher y otros Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, pp. 7 y 27.
- Corte IDH, *Caso Garibaldi Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203, p. 7.
- Corte IDH, *Caso Dacosta Cadogan Vs. Barbados*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Septiembre de 2009. Serie C No. 204, p. 7.
- Corte IDH, *Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, p. 26 y 27.
- Corte IDH, *Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, pp. 7, 10, 13, 18, 19, 20 y 27.
- Corte IDH, *Caso Radilla Pacheco Vs. México*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, p. 11.
- Corte IDH, *Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p. 27.

3.b.ii) Comisión Interamericana de Derechos Humanos

- CIDH, Informe N° 29/88, Caso 9260, *Clifton Wright c. Jamaica*, 14 de septiembre de 1988, p. 4.
- CIDH, Informe N° 74/90, Caso 9850, *Héctor Gerónimo López Aurelli c. Argentina*, 4 de octubre de 1990, p. 5.

- CIDH, Informe N° 10/91, *Banco de Lima c. Perú*, 22 de febrero de 1991, p. 10.
- CIDH, Informe N° 39/96, Caso 11673, *Santiago Marzióni c. Argentina*, 15 de octubre de 1996, pp. 5, 25 y 30.
- CIDH, Informe N° 34/97, *Jorge Enrique Benavides c. Colombia*, 3 de octubre de 1997, p. 6.
- CIDH, Informe N° 4/97, *Nelson Eduardo Jiménez Rueda c Colombia*, 12 de marzo de 1997, p. 5.
- CIDH, Informe N° 47/97, *Tabacalera Boquerón, S.A c. Paraguay*, 16 de octubre de 1997, p. 10.
- CIDH, Informe 48/98, Caso 11403, *Carlos Alberto Martín Ramírez c. Colombia*, 29 de septiembre de 1998, p. 5.
- CIDH, Informe N° 6/98, Caso 10.382, *Máximo Rodríguez c. Argentina*, 21 de febrero de 1998, p. 30.
- CIDH, Informe N° 87/98, Caso 11216, *Oscar Vila-Mazot c. Venezuela*, 12 de octubre de 1998, p. 4.
- CIDH, Informe N° 88/99, Caso 12013, *Lino Oviedo c. Paraguay*, 27 de septiembre de 1999, p. 5.
- CIDH, Informe N° 39/99, *Mevopal, S.A c. Argentina*, 11 de marzo de 1999, p. 10.
- CIDH, Informe N° 4/01, Caso 11625, *M. Eugenia Morales de Sierra c. Guatemala*, 19 Enero de 2001, p. 23.
- CIDH, Informe N° 98/06, Caso 4599, *Rita Ortiz c. Argentina*. 21 de octubre de 2006, p. 30.
- CIDH, Informe N° 40/06, Caso 11214, *Pedro Velázquez Ibarra c. Argentina*, 15 de marzo de 2006, p. 6.
- CIDH, Informe N° 87/07, Caso 73304, *Luis De Jesús Víctor Maldonado Manzanilla c. México*, 17 de octubre de 2007, p. 4.

- CIDH, Informe N° 27/07, Caso 12217, *José Antonio Aguilar Angeletti c. Perú*, 9 de marzo de 2007, p. 5.
- CIDH, Informe N° 67/07, Caso 12703, *Manuel Francisco Portilla Vela c. Perú*, 27 de julio de 2007, p. 5.
- CIDH, Informe N° 68/07, Caso 3798, *Carlos Agripino Huerta Machuca c. Perú*, 27 de julio de 2007, p. 5.
- CIDH, Informe N° 70/08, Caso 12242, *Clínica Pediátrica de la Región de los Lagos c. Brasil*, 16 de octubre de 2008, p. 6.
- CIDH, Informe N° 42/08, *Karen Atala e Hijas c. Chile*, 23 de julio de 2008, p. 6.
- CIDH, Informe N° 58/08, Caso 12122, *Armando Sosa Peceros y otros c. Perú*, 24 de julio de 2008, p. 30.
- CIDH, *Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008*. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 25 febrero 2009, pp. 12, 13, 14, 15, 18 y 23.
- CIDH, *Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión 2004*. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2004, pp. 20 y 21.
- CIDH, *Observaciones y recomendaciones sobre la situación de la libertad de expresión en Uruguay de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos*. Anexo al comunicado de prensa 159/06 del 16 de diciembre de 2006, p. 14.
- CIDH, *Democracia y Derechos Humanos en Venezuela*, 30 diciembre 2009, pp. 16, 22, 23 y 27.
- CIDH, *Estudio Especial sobre el Derecho de Acceso a la Información*. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión, 2007, p. 29.
- CIDH, *La Situación de la Libertad de Expresión en Guatemala*, Capítulo VII, 2003, p. 14.
- CIDH, *El Derecho a la Libertad de Expresión en Paraguay*, 2001, p. 20.

3.b.iii) Comisión Interamericana de Telecomunicaciones

- CITEL, Resolución sobre *Cumplimiento de las normas internacionales y control del espectro Radioeléctrico*, III Reunión del Comité Consultivo Permanente II: Radiodifusión, 2 de marzo de 1997, pp. 14, 15 y 16.

3.b.iv) Tribunal Europeo de Derechos Humanos

- TEDH, *Case of The Sunday Times v. United Kingdom*, Judgment of 29 March, 1979, pp. 19 y 20.
- TEDH, *Case of Barthold v. Germany*. Judgment of 25 March 1985, Serie A N° 90, p. 20.
- TEDH, *Case of Baraona v. Portugal*. Judgment of 8 June 1987, p. 28.
- TEDH, *Case of Motta v. Italy*. Judgment of 19 February 1991, Series A N° 195-A, p. 28.
- TEDH, *Case of Castells v. Spain*. Judgment of 23 April 1992, pp. 19 y 20
- TEDH, *Ruiz-Mateos v. Spain*. Judgment of 23 June 1993, Series A N° 262, p. 28.
- TEDH, *Case of Zana v. Turkey* (69/1996/688/880) Judgment of 25 November 1997, p. 21.
- TEDH, *Case of Sürek v. Turkey (N° 1)*. Application N° 26682/95. Judgment of 8 July 1999, p. 21.
- TEDH, *Case of Okçuoğlu v. Turkey*. Judgment of 8 July 1999, p. 22.
- TEDH, *Case of Cumpănă and Mazăre v. Romania*. N° 33348/96. Judgment of 17 December 2004, pp. 20 y 22.
- TEDH, *Case of Mamere v. France*, N° 12697/03. Judgment of 7 November 2006, pp. 18 y 20.

3.b.v) Corte Internacional de Justicia

- C.I.J., *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment*, February 5 1970, General List N° 50, p. 25

3.b.vi) Unión Internacional de Telecomunicaciones

- UIT, *Informe de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones*. Ginebra 9 de junio al 4 de julio de 2003, p. 13.

- UIT, *Actas finales de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones*. Ginebra 9 de junio / 4 de julio 2003, p. 16.

3.b.vii) Comité de Derechos Humanos

- Comité de Derechos Humanos, *Observación General n° 10, Libertad de expresión (artículo 19)*, XIX período de sesiones, 1983, p. 17.

- Comité de Derechos Humanos, *Observación General n° 11, Prohibición de propaganda a favor de la guerra y apología del odio nacional, racial o religioso (artículo 20)*, XIX período de sesiones, 1983, p. 20.

- Comité de Derechos Humanos, *Observación General N° 13: Igualdad ante los tribunales y derecho de toda persona a ser oída públicamente por un tribunal competente establecido por la ley*, 13 abril de 1984, p. 29

- Comité de Derechos Humanos, *Observación General N° 18, No-discriminación*, 10 noviembre de 1989, pp. 23 y 24.

3.b.viii) Tribunal Penal Internacional para Ruanda

- TPIR, *Case of The Prosecutor v. Nahimana, Ferdinand, Barayagwiza, Jean-Bosco and Ngeze, Hassan* (N° ICTR-99-52-T) Judgment of 3 December 2003, pp. 21 y 22.

4) Exposición de los hechos

Desde que se erigió como Estado independiente, la República Federativa de Chirilagua (en adelante, “el Estado” o “Chirilagua”) ha dirigido todos sus esfuerzos en construir una sólida democracia. Consciente que este compromiso no se agota con la alternancia de los partidos políticos que tradicionalmente han conducido al país, Chirilagua ha ratificado todos los tratados interamericanos de derechos humanos y los principales celebrados en el seno de las Naciones Unidas en la materia.

En este marco democrático, en el año 2006 Atilio Escalante Norris fue elegido Presidente con el voto del 60% de la población, experimentado en la actualidad, una notable aprobación de su gestión. Con la intención de reforzar la participación de la ciudadanía en asuntos de interés público, se propuso incluir en las elecciones de Diputados Federales del 10 de marzo de 2008 una papeleta adicional –llamada “Papeleta de la Democracia”– para consultar a la sociedad sobre la continuidad del Presidente. Pese a que la Constitución prevé la consulta popular como un mecanismo no vinculante ni apto como medio de reforma, el partido opositor y sectores de opinión se resistieron a su inclusión alegando que, a través de este medio, se buscaba incumplir la Constitución para validar un segundo mandato presidencial.

En este contexto, un grupo de estudiantes convocó para el 3 de marzo de 2008, por medio de la red social *Facebook*, a una marcha en contra de la consulta popular, la cual se conocería como el “Facebookazo”. Esta manifestación fue promovida por algunos medios de comunicación, entre ellos, Radical Radio y una emisora ilegal ubicada en la ciudad de San Pedro de los Aguados (en adelante, “San Pedro”) llamada Radio Su-Versión.

Radical Radio, fundada por Byron Dayle y María Luisa Peroni, inició sus transmisiones en 1965 bajo el nombre de Radio Cadena Básica. Tras el fallecimiento de la fundadora en el año 2000, su hija Melanie Pereira Peroni la sucedió en sus roles de accionista y directora de la radio, asumiendo públicamente la vocería de la emisora. El programa de mayor audiencia era

conducido por el locutor William Garra quien, a través del personaje “Fatilio Estafante”, ridiculizaba permanentemente al Presidente presentándolo como un “señorito feudal, voraz y corrupto”. Incluso en uno de los programas, que finalizó con una invitación a la marcha, se analizó la creación de 50 grupos de *Facebook* que propalaban públicamente un discurso altamente agresivo hacia la persona del Sr. Escalante Norris. Con proclamas tales como “Yo también quiero que se muera Atilio Escalante Norris” y proponiendo “¿Cómo darle en la madre al ricachón insensible de Atilio Escalante Norris?”, se transmitieron llamados de oyentes que apoyaban enfáticamente estos contenidos, realizando serios ataques contra él.

Por su parte, la emisora ilegal Radio Su-Versión comenzó a realizar transmisiones *de facto* en 1996 por decisión de la Asociación de Comunidades Sin Tierra de San Pedro de los Aguados. Su puesta en funcionamiento en San Pedro estuvo a cargo del responsable de los proyectos de comunicación, Francis Hoffman, designado como su representante legal. Esta emisora ilegal nunca obtuvo la concesión para el uso y explotación del espacio radioeléctrico exigida por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (en adelante, “LOT”) ni tampoco se presentó a la convocatoria pública realizada por el Estado a principios de año para obtenerla.

En el año 2002, la Sra. Pereira Peroni suscribió un convenio de cooperación con Radio Su-Versión, fruto del cual se autorizaba a esta emisora ilegal a retransmitir los programas de Radical Radio y, en eventos especiales, a transmitir encadenadas. En aplicación de este acuerdo, tanto los sucesos del “Facebookazo” como los derivados de las elecciones que fueron cubiertos por Radical Radio, se retransmitieron a través de Radio Su-Versión.

El día de la marcha el Sr. Garra afirmó que la Guardia Federal había sido enviada a San Pedro para impedir el Facebookazo y alentó a los participantes para que “defendieran sus derechos a toda costa” y no permitieran la interrupción de la marcha. Estas afirmaciones, retransmitidas por Radio Su-Versión, enardecieron a los manifestantes quienes cortaron camino por una calle no autorizada por la que debía pasar una marcha de apoyo al Gobierno.

A pesar de las medidas de prevención adoptadas, los manifestantes del “Facebookazo” se abalanzaron con palos y piedras contra la Policía. Como resultado de la ola de violencia, más de quince personas resultaron heridas, produciéndose la muerte de un policía y cinco civiles.

Asimismo, el día de las elecciones, Radical Radio, encadenada con Radio Su-Versión, vaticinó que el Estado de Gorgia planeaba cometer “un fraude monumental para perpetuar al presidente en el poder”. A raíz de ello, en la ciudad de San Pedro, un grupo de 25 jóvenes intentó prender fuego varias urnas electorales. Vecinos de la zona intentaron detenerlos, produciéndose la muerte de tres de los jóvenes.

Si bien el 10 de marzo se incluyó la Papeleta de la Democracia, obteniendo la coalición de gobierno una amplia victoria en las elecciones, producto del clima de violencia instaurado por los medios de comunicación, el 70% de la población se abstuvo de concurrir a las urnas.

Frente a los hechos violentos ocurridos, el Estado emprendió la investigación y sanción de los responsables. Por un lado, la COFERETEL efectuó una revisión de todas las concesiones de radio vigentes y dispuso la cancelación de cuarenta licencias otorgadas. Una de ellas, la de Radical Radio, se canceló por incumplimiento del artículo 92 de la LOT. Asimismo, la COFERETEL ordenó el cierre de todas las emisoras ilegales del país –entre las que se encontraba Radio Su-Versión– y la confiscación de sus equipos. Todas estas medidas administrativas fueron confirmadas en sede judicial, con excepción de la decisión que decretó la cancelación de la licencia de Radical Radio, cuya demanda de nulidad se encuentra pendiente de resolución. Por otro lado, como resultado de las imputaciones del Ministerio Público por el delito de hurto de bienes del Estado se condenó a la Sra. Pereira Peroni y al Sr. Hoffman a la pena de dos años de prisión, pudiendo conmutarla por una multa de USD200.000. Además, se los condenó por los delitos de instigación a delinquir y difamación, a la pena de seis meses de prisión, con la posibilidad de conmutarla por una multa equivalente a USD15.000. A pesar de ello, sólo la Sra. Pereira Peroni accedió a sufragar la multa, ya que

el Sr. Hoffman adujo no tener dinero para cancelarla. Finalmente, el Sr. Garra fue condenado a la pena de doce años de prisión por los delitos de instigación a delinquir, difamación y homicidio. Todas las sentencias penales fueron confirmadas por los Tribunales de Alzada.

En el marco de la nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones aprobada por el Estado, cuyo objeto es asegurar la igualdad en el acceso a las frecuencias radioeléctricas entre radios comerciales, comunitarias y estatales, Chirilagua llevó a cabo una convocatoria pública en la que espera conceder 100 licencias comunitarias y la misma cantidad de licencias comerciales.

El 2 de diciembre de 2008, la Federación Interamericana de Medios por la Democracia presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Comisión”) por supuestas violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención”) quien, cumplidos los requisitos, sometió el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Corte” o “el Tribunal”).

5. Análisis legal del caso

5.a) Análisis de los aspectos preliminares de admisibilidad

5.a.i) Excepción preliminar de cuarta instancia

Con fundamento en el Preámbulo y el artículo 47.b de la Convención, el Estado solicita a la Corte que se abstenga de ejercer su jurisdicción contenciosa, toda vez que el presente asunto ha sido resuelto por los tribunales internos de Chirilagua en la esfera de su competencia, de conformidad con su ordenamiento jurídico y con el debido proceso legal.

En este sentido, tanto la Corte como la Comisión han afirmado categóricamente que no constituyen una cuarta instancia, puesto que la protección internacional que otorgan los órganos de supervisión de la Convención es de carácter subsidiaria¹. Esta característica

¹ Cfr. Corte IDH, *Asunto Viviana Gallardo y otras*. Serie A Nº G 101/81, párr. 16 y *Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C Nº 111, párr. 71. CIDH, Informe Nº 29/88, Caso 9260, *Clifton Wright c. Jamaica*, 14 de septiembre de 1988, párrs. 5; Informe Nº 87/98, Caso 11216, *Oscar Vila-Mazot c. Venezuela*, 12 de octubre de 1998, párr. 17; Informe Nº 87/07, Caso 73304,

constituye la base de la denominada fórmula de la cuarta instancia, cuya premisa radica en que tales órganos “no puede[n] revisar las sentencias dictadas por los tribunales nacionales que actúen en la esfera de su competencia y aplicando las debidas garantías judiciales, a menos que considere la posibilidad de que se haya cometido una violación a la Convención”².

En el *cas d'espèce*, tanto los procesos administrativos y judiciales iniciados por la cancelación de la licencia a Radical Radio y el cierre de la emisora ilegal Radio Su-Versión como los procesos penales que culminaron en las condenas de la Sra. Pereira Peroni, del Sr. Hoffman y del Sr. Garra, han sido sustanciados con rigurosa observancia de las garantías del debido proceso. Asimismo, los procesos judiciales han sido resueltos por jueces independientes e imparciales que han obrado dentro de los límites de su competencia, permitiéndoles a los presuntos afectados recurrir las sentencias ante un tribunal superior³.

Especial mención merece el proceso penal por el cual se condenó al Sr. Garra a 12 años de prisión por el delito de homicidio de dos civiles y un policía. Habiéndose comprobado judicialmente su responsabilidad en los hechos imputados, lo cierto es que la Corte no puede, sino constituyéndose en una cuarta instancia, evaluar y juzgar el alcance de las teorías sobre autoría y participación⁴ aplicadas al caso concreto que, receptadas por el Código Penal de Chirilagua sin vulnerar la Convención, han sido el sustento legal de la condena del Sr. Garra.

Por ello, coincidiendo con el ex magistrado García Ramírez, quien ha subrayado que la Corte “no puede (...) convertirse en una nueva y última instancia para conocer la controversia

Luis De Jesús Víctor Maldonado Manzanilla c. México, 17 de octubre de 2007, párr. 56; Informe N° 27/07, Caso 12217, *José Antonio Aguilar Angeletti c. Perú*, 9 de marzo de 2007, párr. 42 e Informe N° 67/07, Caso 12703, *Manuel Francisco Portilla Vela c. Perú*, 27 de julio de 2007, párr. 50. Gros Espiell, Héctor, *Responsabilidad del Estado y Responsabilidad Penal Internacional en la Protección Internacional de los Derechos Humanos*, en AA.VV., Fix-Zamudio, Héctor, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, 1998, p. 118. Pasqualucci, Jo M., *Preliminary Objections Before The Inter-American Court Of Human Rights: Legitimate Issues And Illegitimate Tactic*, Virginia Journal of International Law Association, 1999, p. 10.

² CIDH, Informe N° 39/96, Caso 11673, *Santiago Marzoni c. Argentina*, 15 de octubre de 1996, párrs. 49 y 50; Informe N° 4/97, *Nelson Eduardo Jiménez Rueda c. Colombia*, 12 de marzo de 1997, párr. 25; Informe N° 88/99, Caso 12013, *Lino Oviedo c. Paraguay*, 27 de septiembre de 1999, párr. 26 e Informe 48/98, Caso 11403, *Carlos Alberto Martín Ramírez c. Colombia*, 29 de septiembre de 1998, párr. 35.

³ Cfr. CIDH, Informe N° 74/90, Caso 9850, *Héctor Gerónimo López Aurelli. Argentina*, 4 octubre de 1990, p. 22;

⁴ Cfr. Corte IDH, *Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención* (Arts. 1 y 2 Convención) Opinión consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994. párr. 34. CIDH, Informe N°68/07, Caso 3798, *Carlos Agripino Huerta Machuca c. Perú*, 27 de julio de 2007, párr. 75.

suscitada en el orden interno”⁵, Chirilagua sostiene que si la demanda “se limita a afirmar que el fallo fue equivocado o injusto en sí mismo, la petición debe ser rechazada conforme la fórmula arriba expuesta”⁶. La inconformidad de los representantes de las presuntas víctimas con las decisiones que han sido dictadas por los jueces del Estado dentro de los límites de su competencia, no autoriza la intervención de un órgano supranacional para revisarlas⁷.

En razón de los fundamentos vertidos, el Estado solicita respetuosamente a la Corte que desestime la demanda respecto de las presuntas violaciones a los artículos 7, 8, 13, 21, 24 y 25 con relación a los artículos 1.1 y 2 de la Convención.

5.a.ii) Excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos en la jurisdicción interna

El artículo 46.1.a de la Convención dispone que, para determinar la admisibilidad de una petición presentada ante la Comisión, es necesario que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Si bien ello constituye un requisito de admisibilidad ante la Comisión, lo cierto es que “la determinación de si tales recursos se han interpuesto y agotado (...) es una cuestión relativa a la interpretación o aplicación de la Convención que, como tal, cae dentro de la competencia contenciosa de la Corte”⁸. Por ende, es el Tribunal quien “examinará las distintas cuestiones procesales que le han sido sometidas, con el objeto de decidir si existen (...) vicios en el trámite al que ha sido sometido el caso, [de modo tal] que deba rechazarse **in limine** la consideración del fondo”⁹. La Corte, en ejercicio del control que efectúa de las actuaciones de la Comisión, está facultada para “revisar si se han cumplido, por

⁵ Corte IDH, *Caso Vargas Areco Vs. Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C Nº 155, voto razonado de juez García Ramírez, párr. 6.

⁶ CIDH, Informe Nº 40/06, Caso 11214, *Pedro Velázquez Ibarra c. Argentina*, 15 de marzo de 2006, párr. 52 e Informe Nº 34/97, *Jorge Enrique Benavides c. Colombia*, 3 de octubre de 1997, párr. 24.

⁷ Cfr. CIDH, Informe Nº 70/08, Caso 12242, *Clínica Pediátrica de la Región de los Lagos c. Brasil*, 16 de octubre de 2008, párr. 47 e Informe Nº 42/08, *Karen Atala e Hijas c. Chile*, 23 de julio de 2008, párr. 59.

⁸ Corte IDH, *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C Nº 1, párr. 84; *Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C Nº 2, párr. 83 y *Caso Godínez Cruz Vs. Honduras*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C Nº 3, párr. 86.

⁹ Corte IDH, *Caso Velásquez Rodríguez*. Excepciones Preliminares, cit., párr. 34.

parte de [ésta], las disposiciones contenidas en la Convención”¹⁰ y “para sentenciar libremente (...), considerar y revisar **in toto** lo precedentemente actuado y decidido por la Comisión”¹¹.

La exigencia del previo agotamiento de los recursos internos “está concebida en interés del Estado”¹² pues le permite resolver su problema según su propio derecho interno, antes de verse enfrentado a un proceso de índole internacional, lo cual es ampliamente válido por ser la jurisdicción internacional de los derechos humanos coadyuvante de la interna¹³.

La Corte, en su jurisprudencia constante, ha establecido una serie de criterios para que la presente excepción prospere. En primer término, ella debe plantearse de manera expresa en el momento procesal oportuno, esto es, en la etapa de admisibilidad del procedimiento ante la Comisión¹⁴. Caso contrario, cabría presumir que se ha renunciado tácitamente a dicho medio de defensa¹⁵. En segundo lugar, el Estado tiene a su cargo señalar qué recursos internos deben agotarse¹⁶, así como la prueba de que éstos son adecuados y efectivos¹⁷.

¹⁰ Corte IDH, *Control de Legalidad en el ejercicio de las atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos* (arts. 41 y 44 a 51 Convención). OC-19/05 28 de noviembre 2005. Serie A N° 19, párr. 25.

¹¹ Corte IDH, *Caso Velásquez Rodríguez*. Excepciones Preliminares, cit., párr. 29; *Caso Fairén Garbi y Solís Corrales*. Excepciones Preliminares, cit., párr. 34 y *Caso Godínez Cruz*. Excepciones Preliminares, cit., párr. 32.

¹² Corte IDH, *Asunto Viviana Gallardo y otras*, cit., párr. 26.

¹³ Cfr. Corte IDH, *Caso Ríos y otros Vs. Venezuela*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C N° 194, párr. 37; *Caso Gangaram Panday Vs. Surinam*. Excepciones Preliminares. Sentencia 4 de diciembre de 1991. Serie C N° 12, párr. 38; *Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C N° 6, párr. 85 y *El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*. Opinión consultiva OC-2/85, 24 de Septiembre de 1982, Serie A N° 2, párr. 31.

¹⁴ Cfr. Corte IDH, *Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C N° 207, párr. 19; *Caso Dacosta Cadogan Vs. Barbados*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de septiembre de 2009; *Caso Escher y otros Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C N° 199, párr. 28 y 53; *Caso Nogueira de Carvalho y otro Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares y Fondo. Sentencia 28 de noviembre de 2006. Serie C N° 161, párr. 51; Serie C N° 204, párr. 18; *Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C N° 107, párr. 81; *Caso Loayza Tamayo Vs. Perú*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 31 de enero de 1996. Serie C N° 25, párr. 41 y voto razonado de juez Cançado Trindade, párr. 4 y *Caso Castillo Páez Vs. Perú*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 30 de enero de 1996. Serie C N° 24, párr. 41.

¹⁵ Cfr. Corte IDH, *Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 1 de julio de 2009. Serie C N° 198, párr. 20; *Caso Nogueira de Carvalho y otros*, cit., párr. 51 y *Caso Loayza Tamayo*. Excepciones Preliminares, cit., párr. 40.

¹⁶ Cfr. Corte IDH, *Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C N° 197, párr. 23 y *Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 11 de diciembre de 1991. Serie C N° 13, párr. 30.

¹⁷ Cfr. Corte IDH, *Caso Garibaldi Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 23 de septiembre de 2009. Serie C N° 203, párr. 46; *Caso Perozo y otros Vs. Venezuela*. Excepciones

En cumplimiento de tales requisitos formales, Chirilagua ha planteado en su primera oportunidad procesal que en la jurisdicción interna estaba pendiente por resolver ante el Tribunal Administrativo una “acción de nulidad” incoada por Byron Dayle con motivo de la cancelación de la licencia a Radical Radio dispuesta por la COFERETEL. En razón de que aquel procedimiento continúa avanzando en sus etapas, Chirilagua reitera en esta instancia la excepción oportunamente opuesta. Por ello, la primera conclusión que, *a priori*, se impone es que el Estado no sólo la ha invocado tempestivamente sino que ha especificado de manera clara, expresa e incontrovertible el recurso que es preciso agotar.

En lo que concierne a los demás requisitos sustanciales, el Estado considera que, en la especie, la “acción de nulidad” es el recurso adecuado en la medida que es “idóne[o] para proteger la situación jurídica [que el accionante considera] infringida”¹⁸. En efecto, dentro de las múltiples acciones del ordenamiento interno, la de nulidad permite evaluar si la revocación de la licencia dispuesta a Radical Radio se ha ajustado a las disposiciones vigentes y si tal medida ha sido razonable, proveyendo lo necesario para remediarla en caso contrario¹⁹. Del mismo modo, el recurso de nulidad es efectivo puesto que “es capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido”²⁰, esto es, revisar integralmente dicha decisión administrativa y decretar, en su caso, su nulidad.

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 28 de enero de 2009, Serie C Nº 195, párr. 42; *Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 25 de noviembre de 2005. Serie C Nº 137, párr. 49; *Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 8 de septiembre de 2005. Serie C Nº 130, párr. 61 y *Caso Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 de noviembre de 2004. Serie C Nº 118, párr. 135.

¹⁸ Corte IDH, *Excepciones al agotamiento de los recursos internos* (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva. OC-11/90 del 10 de agosto de 1990. Serie A No. 11, párr. 36; *Caso Ríos y otros*, cit., párr. 284; *Caso Perozo y otros*, cit., párr. 299 y *Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C Nº 17, párr. 63.

¹⁹ Cfr. Corte IDH, *Garantías judiciales en Estados de Emergencia* (arts. 27.2, 25 y 8 Convención). Opinión Consultiva OC-9/87 6 de octubre de 1987. Serie A Nº 9, párr. 24; *Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awastegni Vs. Nicaragua*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 31 de agosto de 2001. Serie C Nº 79, párr. 113; *Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 6 de febrero de 2001. Serie C Nº 74, párr. 136 y *Caso Cantoral Benavides Vs. Perú*. Fondo. Sentencia 18 de agosto de 2000. Serie C Nº 69, párr. 164.

²⁰ Corte IDH, *Caso Durand y Ugarte Vs. Perú*. Excepciones Preliminares. Sentencia 28 de mayo de 1999. Serie C Nº 50, párr. 34; *Caso Godínez Cruz Vs. Honduras*. Fondo. Sentencia 20 de enero de 1989. Serie C Nº 5, párr. 69 y *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Fondo. Sentencia 29 de julio de 1988. Serie C Nº 4, párr. 66.

Por último, Chirilagua entiende que el plazo transcurrido desde la interposición de la acción no ha representado un retardo injustificado en la decisión que, como tal, pudiera configurar la causal eximente de agotar dicho recurso, prevista en el artículo 46.2.c de la Convención. Al respecto, el Estado desea mencionar que al tiempo de presentarse la petición ante la Comisión sólo habían transcurrido siete meses desde la interposición de la acción de nulidad. Pese a ello, aún computándose el plazo hasta el día de hoy, no ha existido un retardo injustificado dado que el proceso ha avanzado significativamente, encontrándose en la etapa de producción de las pruebas. Por ello, contemplando la actividad de los interesados en el marco de un proceso signado por los principios de bilateralidad y disposición, no se ha configurado un supuesto de denegación de justicia²¹.

Por lo expuesto, Chirilagua solicita a la Corte que se declare incompetente para analizar presuntas violaciones a los artículos 8, 13, 21, 24 y 25 con relación al 1.1 y 2 de la Convención derivadas de la cancelación de la licencia a Radical Radio.

5.a.iii) Incompetencia de la Corte *ratione personae* respecto de Radical Radio y Radio Su-Versión

Si bien esta Corte tiene competencia *ratione materiae*, *ratione temporis* y *ratione loci* para conocer en el *sub lite*²² puede advertirse que, ante la pretensión de los representantes de las presuntas víctimas en torno a considerar como presuntas víctimas a Radical Radio y Radio Su-Versión, el Tribunal carece de competencia *ratione personae* para ello.

En atención a que los derechos esenciales el hombre tienen como fundamento los atributos de la persona humana²³, el artículo 1.2 de la Convención dispone de manera inequívoca que, para sus efectos, “persona es todo ser humano”. En este sentido, la Corte ha

²¹ Cfr. Corte IDH, *Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 126 y 136; *Caso Las Palmeras Vs. Colombia*. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90, párr. 58 y *Caso Ivcher Bronstein*, cit., párr. 137.

²² Cfr. Corte IDH *Caso Blake Vs. Guatemala*. Excepción Preliminar. Sentencia 2 julio 1996. Serie C No. 27 p. 39.

²³ Corte IDH, “*Otros Tratados*” objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre los Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82, 24 de septiembre de 1982. Serie A No.1, párr. 40.

afirmado categóricamente que los derechos reconocidos en la Convención corresponden a personas, “es decir, a seres humanos y no a instituciones”²⁴. En otros términos, “la titularidad de los derechos humanos reside en cada individuo, y por ello la violación de los derechos debe ser analizada de manera asimismo individual”²⁵. Por lo tanto, los derechos de las personas jurídicas no se hallan “protegido[s] por la Convención”²⁶ encontrándose “fuera del alcance de su competencia”²⁷. Tal postura es compartida por la Comisión quien recordó que la Convención protege “a las personas físicas o naturales, excluyendo de su ámbito de aplicación a las personas (...) ideales, por cuanto éstas son ficciones jurídicas sin existencia real en el orden material”²⁸ y, coherente con ello, no las ha incluido como presuntas víctimas.

Chirilagua, sin embargo, no cuestiona que “en general, los derechos y obligaciones atribuidos a las personas morales se resuelven en derechos y obligaciones de las personas físicas que las constituyen”²⁹. El Estado, respetando tal tesis, considera que el Tribunal en tanto no procedan otras excepciones opuestas, puede examinar la posible afectación de los derechos individuales de las personas que han constituido ambas emisoras, quienes también han sido incluidas como víctimas en el *sub lite*. Sin perjuicio de ello, se colige que la Corte no es competente para analizar la pretendida afectación de los artículos 8, 13, 21, 24 y 25 con relación al 1.1 y 2 de la Convención en perjuicio de Radical Radio y Radio Su-Versión en tanto personas jurídicas³⁰, como consecuencia de la cancelación de la licencia y cierre de la emisora ilegal, respectivamente, toda vez que éstas no pueden ser consideradas víctimas de violaciones de derechos de la Convención³¹, lo que Chirilagua solicita que así se declare.

²⁴ Corte IDH, *Caso Usón Ramírez*, cit., párr. 45.

²⁵ Corte IDH, *Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C Nº 112, párr. 106.

²⁶ Corte IDH, *Caso Usón Ramírez*, cit., párr. 63.

²⁷ Corte IDH, *Caso Usón Ramírez*, cit., párr. 45.

²⁸ CIDH, Informe Nº 39/99, *Mevopal, S.A c. Argentina*, 11 de marzo de 1999, párr. 17.

²⁹ Corte IDH, *Caso Cantos Vs. Argentina* Excepción Preliminar. Sentencia 7 septiembre 2001 Serie C Nº 85 p27

³⁰ Cfr. Corte IDH, *Caso Perozo y otros*, cit., párr. 74 y *Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C Nº 144, párr. 271.

³¹ Cfr. CIDH, Informe Nº 47/97, *Tabacalera Boquerón, S.A c. Paraguay*, 16 de octubre de 1997, párr. 25 y 36 e Informe Nº 10/91, *Banco de Lima c. Perú*, 22 de febrero de 1991, párr. 2.

5.a.iv) Incompetencia de la Corte *ratione personae* respecto de la población de Chirilagua

Los representantes de las presuntas víctimas han incluido a la población de Chirilagua como supuesta afectada de la violación al artículo 13 de la Convención, en virtud de la cancelación de la licencia a Radical Radio y el cierre de la emisora ilegal, Radio Su-Versión.

Al respecto, la Corte ha sido categórica en afirmar que las presuntas víctimas “deben ser mencionad[a]s en la demanda y en el informe dictado por la Comisión”³². En otros términos, “con el propósito de garantizar los efectos propios (*effet utile*) del artículo 23 del Reglamento y la protección efectiva de los derechos de las presuntas víctimas, [resulta] preciso que éstas se encuentren debidamente identificadas e individualizadas en la demanda que la Comisión (...) presenta ante [el] Tribunal”³³. La seguridad jurídica exige que todas ellas estén identificadas por la Comisión, “no siendo posible añadir nuevas presuntas víctimas en la demanda, sin que ello conlleve un perjuicio al derecho de defensa del Estado demandado”³⁴

En el *cas d'espèce*, teniendo presente que corresponde a la Comisión “identificar con precisión y en la debida oportunidad procesal a las presuntas víctimas en un caso ante la Corte”³⁵, surge que aquélla no ha incluido como afectada –ni en el informe preliminar ni en la demanda presentada ante la Corte– a la comunidad de Chirilagua. El Tribunal ha afirmado que, para establecer la responsabilidad de un Estado por presuntas violaciones a los derechos reconocidos por la Convención, resulta “necesario la debida identificación por su nombre del presunto lesionado”³⁶ lo cual, evidentemente, no sucede con la población de Chirilagua.

³² Corte IDH, *Caso Ríos y otros*, cit., párr. 43 y *Caso Perozo y otros*, cit., párr. 50.

³³ Corte IDH, *Caso “Instituto de Reeducación del Menor”*, cit., párr. 109.

³⁴ Corte IDH, *Caso Radilla Pacheco Vs. México*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C Nº 209, párr. 110.

³⁵ Corte IDH, *Caso Radilla Pacheco*, cit., párr. 108; *Caso Kawas Fernández Vs. Honduras*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 3 de abril de 2009. Serie C Nº 196, párr. 27; *Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primero de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C Nº 182, párr. 229; *Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez Vs. Ecuador*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C Nº 170, párr. 224; *Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C Nº 153, párr. 29 y *Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C Nº 148, párr. 98.

³⁶ Corte IDH, *Caso “Instituto de Reeducación del Menor”*, cit., párr. 107.

Por lo expuesto, el Estado solicita a esta Corte que se declare incompetente con relación a la supuesta violación del artículo 1.1 y 13 de la Convención en perjuicio de la comunidad de Chirilagua en su conjunto.

5.b) Análisis de los asuntos legales del caso

Empero, si el Tribunal rechazare las excepciones preliminares opuestas por el Estado, se desarrollarán subsidiariamente los argumentos sobre las consideraciones de fondo del caso.

5.b.i) Chirilagua no violó el artículo 13 en relación con el 1.1 y 2 de la Convención

La Convención, en su artículo 13.1, reconoce a todo ser humano el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Tal derecho fundamental, entendido como la facultad de buscar, recibir y difundir todo tipo de información e ideas³⁷, abarca a la expresión humana en todas sus formas y manifestaciones³⁸.

La Corte, en su jurisprudencia constante, se ha pronunciado acerca de la doble dimensión que caracteriza a la libertad de expresión, la cual requiere, por un lado, que se garantice el derecho individual que tiene toda persona a no ser arbitrariamente impedido de manifestar su propio pensamiento³⁹ –dimensión individual– y, por el otro, el derecho colectivo que tiene la sociedad en su conjunto a recibir cualquier información⁴⁰, a conocer la expresión del pensamiento ajeno⁴¹ y a “estar bien informada”⁴² –dimensión social–.

³⁷ Cf. Corte IDH, *La colegiación obligatoria de periodistas* (art. 13 y 29 de la Convención). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A N° 5, párr. 30; *Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 19 de septiembre de 2006. Serie C N° 151, párr. 76 y *Caso Palamara Iribarne Vs. Chile*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 22 de noviembre de 2005. Serie C N° 135, párr. 71.

³⁸ CIDH, *Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión*. Principio 1°. Adoptada en octubre de 2000.

³⁹ García Ramírez, Sergio “*La libertad de Expresión en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*”, Comisión de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 2007, págs. 18, 19.

⁴⁰ Cf. Corte IDH, *La Corte Interamericana de Derechos Humanos un Cuarto de Siglo 1979-2004*, San José p.126

⁴¹ Cf. Corte IDH, *Caso Kimel Vs. Argentina*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 2 de mayo de 2008. Serie C N° 177, párr. 53; *Caso Ricardo Canese*, cit., párr. 77; *Caso Herrera Ulloa*, cit., párr. 108 y *Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 5 febrero de 2001. Serie C N° 73, párr. 64; *Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta* (Arts. 14.1, 1.1 y 2 de la Convención). OC-7/86 del 29 de agosto de 1986. Serie A N° 7, voto razonado de juez Gros Espiell, párr. 5.

⁴² Corte IDH, *Caso Ricardo Canese*, cit., párr. 82; *Caso Herrera Ulloa*, cit., párr. 112 y *La colegiación obligatoria de periodistas*, cit., párr. 70; CIDH, *Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008*. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 25 febrero 2009, párr. 12.

La libertad de expresión se erige, de este modo, en “la piedra angular [...] de una sociedad democrática”⁴³, la cual no puede ser concebida “sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse”⁴⁴. El respeto de su ejercicio resulta indispensable para que “la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada [puesto que] una sociedad que no esté bien informada no es plenamente libre”⁴⁵.

Sin embargo, el Tribunal ha destacado que, “la libertad de expresión no es un derecho absoluto”⁴⁶, sino que “puede estar sujeta a restricciones cuando interfier[a] con otros derechos garantizados por la Convención”⁴⁷. Esta posición ha sido compartida por la Comisión, que incluso ha reconocido que existen “ciertos tipos de discursos que, por virtud de prohibiciones expresas plasmadas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se encuentran excluidos del ámbito de cobertura [de] esta libertad”⁴⁸.

5.b.i.a) Chirilagua no violó los artículos 13.1 y 13.3 de la Convención con relación a la cancelación de la licencia a Radical Radio y el cierre de Radio Su-Versión

Los Estados americanos han reconocido “la soberanía nacional sobre la utilización del espectro radioeléctrico comprendido dentro de su jurisdicción”⁴⁹. Teniendo en cuenta que la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas ya ha advertido sobre las características propias del espacio radioeléctrico, al ser éste “un recurso público limitado”⁵⁰ resulta una restricción legítima a la libertad de expresión que se sometan a las empresas de radiodifusión a un régimen de autorización previa⁵¹.

⁴³ Corte IDH, *Caso Usón Ramírez* cit, párr 263; *Caso Ríos y otros* cit, párr 105 y *Caso Perozo y otro* cit, párr 116

⁴⁴ Corte IDH, *La colegiación obligatoria de periodistas*, cit., párr. 69.

⁴⁵ Corte IDH, *Caso Claude Reyes*, cit., párr. 85; *Caso Ricardo Canese*, cit., párr. 85; *Caso Herrera Ulloa*, cit., párr. 112; *Caso Ivcher Bronstein*, cit., párr. 112 y *Caso “La última tentación de Cristo”*, cit., párr. 68;

⁴⁶ Corte IDH, *Caso Kimel*, cit, párr. 54; *Caso Ricardo Canese*, cit, párr. 95; *Caso Palamara Iribarne*, cit, párr 79.

⁴⁷ Corte IDH, *Caso Apitz Barbera y otros*, cit., párr. 131; *Caso Kimel*, cit., párr. 56.

⁴⁸ CIDH, *Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos* 2008, cit., párr. 52.

⁴⁹ Asamblea General de la OEA, *Convenio Interamericano sobre Permiso Internacional de Radioaficionado*, entrada en vigor el 23 de febrero de 1996.

⁵⁰ *Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión*, de los relatores en libertad de expresión de la OEA, Naciones Unidas, África y Europa, diciembre de 2007. Cfr. UIT, *Informe de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones*. Ginebra 9 de junio al 4 de julio de 2003.

⁵¹ Cfr. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, artículo 10.

Recogiendo los estándares internacionales en la materia, la Constitución de Chirilagua reconoce el derecho a la libertad de expresión y dispone que la administración del espectro electromagnético debe regirse por los principios de equidad, igualdad y pluralismo informativo. En cumplimiento de tal mandato, la LOT regula los “procesos de asignación de licencias o frecuencias [para que] sean abiertos, públicos y transparentes”⁵². Asimismo, y consciente del “fracaso de muchos países en reconocer la radiodifusión comunitaria como un tipo diferente de comunicación social”⁵³, Chirilagua las ha incluido en dicha ley como una “forma diferenciada de medios de comunicación”⁵⁴. Es evidente, entonces, que las “radios comunitarias son positivas (...) siempre que lo hagan en el marco legal”⁵⁵.

Sin embargo, Chirilagua –al igual que el resto de los Estados– se encuentra frente al problema que representan casos como el de Radio Su-Versión, que bajo la apariencia de constituir una radio comunitaria esconde un uso ilegal del espacio radioeléctrico. Esta grave situación ya ha sido advertida por la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la Comisión (en adelante, “Relatoría Especial”) quien ha señalado que existen “radios que actúa[n] al margen de la legalidad, lo cual ocasiona interferencias en el espectro (...), [siendo que] la mayoría de ellas se autodenomina comunitaria sin serlo”⁵⁶. El problema de las transmisiones clandestinas, “tiene repercusiones a nivel internacional, creando interferencias perjudiciales a emisoras de otros países y plantea el tema de la responsabilidad en la parte de los estados que no ejercen control”⁵⁷. Conforme al deber de Chirilagua de arbitrar las medidas necesarias para que “no se permita (...) el funcionamiento de radios ilegales”⁵⁸ la

⁵² CIDH, *Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008*, cit., párr. 106

⁵³ *Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión*, cit.,

⁵⁴ *Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión*, cit.,

⁵⁵ CIDH, *Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008*, cit., párr. 226; *La Situación de la Libertad de Expresión en Guatemala*, 2003, Capítulo VII, párr. 135

⁵⁶ CIDH, *Observaciones y recomendaciones sobre la situación de la libertad de expresión en Uruguay de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión*. Anexo al comunicado de prensa 159/06.

⁵⁷ CITEI, *Resolución sobre Cumplimiento de las normas internacionales y control del espectro Radioeléctrico*, III Reunión del Comité Consultivo Permanente II: Radiodifusión. 2 Marzo 1997.

⁵⁸ CIDH, *Observaciones y recomendaciones sobre la situación de la libertad de expresión en Uruguay de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos*, cit.,

COFERETEL dispuso el cierre de todas las emisoras ilegales en el país, entre ellas Radio Su-Versión, y procedió a la confiscación de sus equipos. Ello, a juicio de los representantes de las presuntas víctimas, importó una violación al artículo 13.1 y 13.3 de la Convención.

En el presente caso, el Sr. Francis Hoffman, responsable de esta radio ilegal, usurpó una frecuencia que nunca le fue asignada lo cual, además de constituir un delito penal, determinó el cierre de Radio Su-Versión. En efecto, como lo ha afirmado la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones de la Organización de los Estados Americanos, “el funcionamiento de las emisoras clandestinas (...), en ningún caso podrá constituirse [como] base para su reconocimiento posterior”⁵⁹. En otras palabras, no puede sostenerse derecho alguno sobre un espacio al que, por más tiempo que haya transcurrido, nunca se estuvo autorizado a explotar. Reconocer lo contrario violaría, *mutatis mutandi*, la obligación a cargo del Estado de “promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación”⁶⁰, ya que la existencia de emisoras ilegales constituye un agravio para aquellas personas que aguardan la apertura de una convocatoria sin recurrir a vías *de facto*.

Chirilagua, lejos de cuestionar la finalidad social que cumplen las radios comunitarias, ha sancionado una nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones con un sistema equitativo de concesión de licencias que las comprende junto a estaciones comerciales e institucionales. Asimismo, ha llevado a cabo una convocatoria pública, en la cual se espera conceder 100 licencias para radios comerciales y 100 para radios comunitarias.

Por otra parte, en lo concerniente a la cancelación de la licencia a Radical Radio, cabe recordar que en materia de telecomunicaciones existen requisitos técnicos ineludibles. El artículo 92 de la LOT dispone que, a través del acto administrativo por el cual se adjudica una licencia para el uso y explotación del espectro electromagnético, se asigna únicamente una “determinada porción de dicho espacio”. Ello implica que el espacio radioeléctrico que se

⁵⁹ CITEL, Res. sobre *Cumplimiento de las normas internacionales y control del espectro Radioeléctrico*, cit.,

⁶⁰ CIDH, *Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008*, cit., párr. 216

adjudica está limitado exclusivamente a una porción bien identificada. El incumplimiento de este requisito, en función de la obligación del Estado de establecer “procedimientos administrativos sancionatorios”⁶¹, importa el inicio de actuaciones para la cancelación de las licencias, lo cual de ningún modo constituye una restricción indirecta de la libertad de expresión en perjuicio de las presuntas víctimas.

Con motivo de la suscripción del convenio de cooperación que efectuó la Directora de Radical Radio con Radio Su-Versión, aquella emisora comenzó a realizar transmisiones *de facto* de su programación a través de esta frecuencia ilegal, utilizando ilícitamente una porción del espacio radioeléctrico que nunca se le había adjudicado en su concesión originaria. Este accionar vedado expresamente por el artículo 92 de LOT, además de configurar una causal para la cancelación de la licencia a Radical Radio, constituye el delito de hurto de bienes del Estado, de conformidad con el Código Penal de Chirilagua.

Como quedó demostrado, tanto las acciones de la Sra. Pereira Peroni como las del Sr. Hoffman encuadraron en este tipo penal que sanciona a quien se apodere de un bien público para su uso o provecho propio. Toda vez que el espacio radioeléctrico es un bien público, su explotación constituye un “derecho soberano de cada Estado”⁶² y, por ende, un bien susceptible de tutela penal. Por ello, en razón del deber de Chirilagua de adoptar “disposiciones en el orden penal, administrativo y civil que establezcan sanciones para las emisoras ilegales y sus responsables”⁶³, el inicio de las actuaciones por el delito de hurto de bienes del Estado contra las presuntas víctimas resultaba un imperativo legal.

5.b.i.b) Chirilagua no violó los artículos 13.1 y 13.2 de la Convención con relación a las condenas por los delitos de difamación e instigación a delinquir

Como ha afirmado el ex magistrado García Ramírez, resulta frecuente que la libertad de expresión colisione con otros derechos, como lo es aquel que tutela el honor recogido por el

⁶¹ CIDH, *Democracia y Derechos Humanos en Venezuela*, 30 diciembre 2009, párr. 460.

⁶² UIT, *Actas finales de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones*. Ginebra 9 de junio / 4 de julio 2003.

⁶³ CITEL, Res. sobre *Cumplimiento de las normas internacionales y control del espectro Radioeléctrico*, cit.

artículo 11 de la Convención⁶⁴. Debido a que la Convención no establece una jerarquía entre ellos⁶⁵, la solución no radica en “categorizar estos derechos ya que ello colisionaría con la Convención”⁶⁶, sino que “ambos (...) deben ser tutelados y coexistir de manera armoniosa”⁶⁷.

El artículo 13.2 de la Convención, al tiempo que proscribe la implementación de mecanismos de censura previa, autoriza a los Estados a establecer restricciones a la libertad de expresión a través de un sistema de responsabilidades ulteriores. En tal sentido, frente a un ejercicio abusivo de este derecho, “es legítimo que quien se considere afectado en su honor recurra a los medios judiciales que el Estado disponga para su protección”⁶⁸, ya que esta libertad conlleva deberes y responsabilidades para quien se expresa⁶⁹. Conforme a ello, Chirilagua prevé la figura de difamación en su Código Penal y, en base a ella, se condenó a la Sra. Pereira Peroni, al Sr. Hoffman y al Sr. Garra por la comisión de este delito.

La complicidad de los responsables de Radical Radio y Radio Su-Versión respecto de las manifestaciones que se propalaron por los oyentes y los 50 grupos de Facebook con un contenido ofensivo contra Escalante Norris, no puede asemejarse al debate que debe fomentarse respecto de cierto tipo de información. Discursos que proclaman violentamente su muerte junto con los insultos e injurias humillantes promovidos en connivencia con la Sra. Pereira Peroni, con el locutor que alentó semejantes ofensas –Sr. William Garra– y con el Sr. Hoffman, que se encargó de retransmitir tales agravios por medio de una radio ilegal, imponen la necesidad, de proteger el derecho a la honra del Sr. Escalante Norris.

Por más que la “protección al honor de un funcionario público deb[a] permitir el más amplio control ciudadano sobre el ejercicio de sus funciones”⁷⁰, ello no significa que “el

⁶⁴ Cfr. Corte IDH *Caso Herrera Ulloa*, cit., voto razonado de juez García Ramírez, párr. 11.

⁶⁵ Cfr. Corte IDH, *Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos* (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención). Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993. Serie A N° 13 párr. 22.

⁶⁶ Corte IDH, *Caso Kimel*, cit., voto concurrente razonado de juez Diego García-Sayán, párr. 18.

⁶⁷ Corte IDH, *Caso Tristán Donoso Vs. Panamá*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C N° 193 párr. 93.

⁶⁸ Corte IDH *Caso Tristán Donoso*, cit, párr. 111; *Caso Kimel*, cit, párr 55 y *Caso Ricardo Canese*, cit, párr. 101.

⁶⁹ Comité de Derechos Humanos, *Observación General n° 10, Libertad de expresión (artículo 19)*, 1983.

⁷⁰ Cfr. Corte IDH, *Caso Tristán Donoso*, cit, párr. 122, *Caso Kimel* cit, párr. 63 y *Caso Claude Reyes* cit, párr. 89.

honor (...) de las personas públicas no deba ser jurídicamente protegido”⁷¹, más aún cuando los agravios contra Escalante Norris no se refirieron a su condición de mandatario sino que se centraron en cuestiones que nada tienen que ver con el escrutinio y la crítica del público⁷².

Chirilagua reafirma que el ejercicio de la libertad de expresión no puede “legítima[r] frases y términos manifiestamente injuriosos (...) que vayan más allá del legítimo ejercicio del derecho a opinar o el ejercicio de la crítica”⁷³ y que, por esta razón, “no puede prevalecer en todos los casos sobre la necesidad de proteger el honor y la reputación de los demás, sean personas privadas o funcionarios públicos”⁷⁴. Por ello, frente a un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, Chirilagua debe acreditar que la restricción acaecida en forma de responsabilidad ulterior respetó el estándar construido por la Corte en la materia.

En primer lugar, debe examinarse si la limitación cumple con el requisito de legalidad⁷⁵. Este principio implica que la ley, tanto en “sentido formal como material”⁷⁶, es la que “debe establecer las restricciones a la libertad de información”⁷⁷. En el ámbito del derecho penal, la vigencia del principio *nullum crimen nulla poena sine lege* dependerá de que el tipo penal se formule de manera “expresa, precisa, taxativa y previa [para] brindar seguridad jurídica al ciudadano”⁷⁸. En tal sentido, la figura de difamación prevista en el Código Penal de Chirilagua acata tales preceptos y sanciona a quien hubiere imputado a algún individuo “un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público, u ofensivo a su honor o reputación”. En consecuencia, puede advertirse que la norma reúne los caracteres de claridad y precisión⁷⁹ encontrándose en plena armonía con los artículos 2 y 9 de la Convención.

⁷¹ Corte IDH, *Caso Ricardo Canese*, cit., párr. 100 y *Caso Herrera Ulloa*, cit., párr. 128.

⁷² Cfr. Corte IDH, *Caso Kimel*, cit., párr. 86. *Caso Ricardo Canese* cit., párr. 103 y *Caso Herrera Ulloa* cit., párr. 129.

⁷³ Corte IDH, *Caso Kimel*, cit., voto razonado de juez García-Sayán, párr. 16.

⁷⁴ TEDH, *Case of Mamere v. France*, N° 12697/03. Judgment of 7 November 2006, párr. 27.

⁷⁵ Cfr. Corte IDH, *Caso Tristán Donoso*, cit., párr. 77.

⁷⁶ Corte IDH, *Caso Usón Ramírez*, cit., párr. 271 y *Caso Kimel*, cit., párr. 63.

⁷⁷ Corte IDH, *Caso Tristán Donoso*, cit., párr. 77; *Caso Kimel*, cit., párr. 63, y *Caso Claude Reyes*, cit., párr. 89.

⁷⁸ Corte IDH, *Caso Kimel*, cit., párr. 63.

⁷⁹ CIDH, *Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008*, cit., párr. 97.

En segundo lugar, debe comprobarse si la limitación estuvo orientada al logro de “una finalidad compatible con la Convención”⁸⁰. Para ello, con sólo acudir a sus artículos 11 y 13.2.a) se advierte que “la protección de la honra y reputación de toda persona es un fin legítimo”⁸¹, debiéndose establecer las “sanciones que fueren necesarias para obtener tal propósito”⁸². En consecuencia, como la sanción penal ha tenido en miras tutelar el honor de Escalante Norris, la restricción ha sido legítima conforme al artículo 13.2 de la Convención.

Por último, resta determinar si la limitación ha sido necesaria, idónea y proporcional en una sociedad democrática⁸³. Al efecto, si bien las manifestaciones que “chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos”⁸⁴ se encuentran protegidas, la Corte “no [ha] estima[do] contraria a la Convención cualquier medida penal a propósito de la expresión de informaciones u opiniones”⁸⁵. Por lo tanto, resulta lícita la adopción “de medidas, incluso penales, destinadas a reaccionar de manera adecuada y no excesiva contra acusaciones difamatorias (...) formuladas con mala fe”⁸⁶. A su vez, consciente del rol esencial de la libertad de expresión, habiéndose condenado a la Sra. Pereira Peroni y al Sr. Hoffman a la pena de seis meses de prisión, Chirilagua les permitió conmutarla con el pago de la multa. Distinta solución mereció el caso del Sr. Garra, ya que habiendo sido condenado, además, por el delito de homicidio, el pago de una multa no podía excusar nunca la pena impuesta por la violación al derecho a la vida. Advirtiéndose, entonces, la necesidad social imperiosa⁸⁷ a la que respondía la limitación, la imposición de la sanción penal resultaba, dentro de las diversas alternativas, la menos lesiva para tutelar el honor de Escalante Norris. Pese a la posibilidad brindada por el Estado, sólo la Sra. Pereira Peroni accedió a pagar la multa, ya que el Sr. Hoffman adujo no tener

⁸⁰ Corte IDH, *Caso Kimel*, cit., párr. 70.

⁸¹ Corte IDH, *Caso Tristán Donoso* cit., párr. 118 y *Caso Kimel*, cit., párr. 71.

⁸² Corte IDH, *Caso Tristán Donoso* cit., párr. 112 y *Caso Kimel*, cit., párr. 75.

⁸³ Cfr. Corte IDH, *Caso Usón Ramírez*, cit., párr. 278, 282 y 384; *Caso Tristán Donoso* cit., párr. 76 y 116; *Caso Kimel*, cit., párr. 58; *Caso Palamara Iribarne*, cit., párr. 35 y *Caso Herrera Ulloa*, cit., párrs. 120 y 121.

⁸⁴ Corte IDH *Caso Kimel* cit., párr. 88. Cfr. *Caso Ivcher Bronstein* cit., párr. 152; *Caso Ricardo Canese* cit párr. 83.

⁸⁵ Corte IDH, *Caso Tristán Donoso* cit., párr. 120 y *Caso Kimel*, cit., párr. 78.

⁸⁶ TEDH, *Case of Castells v. Spain*. Judgment of 23 April 1992, párr. 46.

⁸⁷ Cfr. TEDH, *Case of The Sunday Times v. United Kingdom*, Judgment of 29 March, 1979, p. 59. Corte IDH, *Caso Usón Ramírez*, cit., párr. 295; *Caso Kimel*, cit., párr. 83; *Caso Palamara Iribarne*, cit., párr. 85

dinero y, por ello, se le aplicó la pena de prisión mínima prevista. En cualquiera de los casos, la restricción también ha sido idónea ya que sirvió para “salvaguardar, a través de la conminación de pena, el bien jurídico que se [ha querido] proteger”⁸⁸.

Finalmente, la restricción ha sido proporcional puesto que ha “interf[erido] en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho a la libertad (...) de expresión”⁸⁹ y no ha limitado más de lo “estrictamente necesario el derecho proclamado”⁹⁰. Por ello, valorando la favorable posición económica de la accionista de Radical Radio, la pena mínima de prisión impuesta a Hoffman y advirtiendo el dolo con el que se actuó, y la gravedad del daño causado⁹¹, Chirilagua concluye que la restricciones fueron “estrictamente proporcional[es]”⁹², ya que no han sido desmedidas frente a las ventajas obtenidas a través de su imposición.

Mención especial merecen las acciones criminales que dieron lugar a las condenas por el delito de instigación a delinquir. La previsión de esta figura en el Código Penal de Chirilagua tiene su razón de ser en la obligación, impuesta a los Estados en el artículo 13.5 de la Convención, de prohibir las expresiones de odio que constituyan incitaciones a la violencia o a cualquier otra acción ilegal⁹³. Si bien los lineamientos de este inciso aún no han sido desarrollados por la Corte, tanto el Tribunal Europeo como el Tribunal Penal Internacional para Ruanda⁹⁴ (en adelante, Tribunal para Ruanda) han elaborado una serie de principios para su interpretación. En tal sentido, la Relatoría Especial ha señalado que la jurisprudencia de ambos “debe utilizarse (...) como estándares mínimos”⁹⁵ dentro del sistema interamericano.

⁸⁸ Corte IDH, *Caso Tristán Donoso* cit., párr. 118 y *Caso Kimel*, cit., párr. 71.

⁸⁹ Cfr. Corte IDH, *Caso Usón Ramírez*, cit., párr. 295; *Caso Claude Reyes y otros*, cit., párr. 91.

⁹⁰ TEDH, *Case of The Sunday Times*, cit., párr. 62, p. 38 and *Case of Barthold v. Germany*. Judgment 25 March 1985, Serie A N° 90, párr. 59, pág. 26. Corte IDH, *Caso Usón Ramírez*, cit., párr. 295; *Caso Kimel*, cit., párr. 83;

⁹¹ Cfr. Corte IDH, *Caso Usón Ramírez*, cit., párr. 290. TEDH, *Case of Mamere*, cit., párr. 27; *Case of Castells v. Spain*, cit., párr. 42 y 46 y *Case of Cumpăna and Mazare v. Romania*. Judgment 17 December 2004, párr. 115.

⁹² Cfr. Corte IDH, *Caso Chaparro Álvarez y Lapo Ñíguez*, cit., párr. 93 y *Caso Usón Ramírez*, cit., párr. 295.

⁹³ Comité de Derechos Humanos, *Observación General n° 11, Prohibición de propaganda a favor de la guerra y apología del odio nacional, racial o religioso (artículo 20)*, XIX período de sesiones, 1983, párr. 2. CIDH, *El Derecho a la Libertad de Expresión en Paraguay*, 2001, párr. 75

⁹⁴ El Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) fue creado el 8 de noviembre de 1994 por la Resolución N° 955 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

⁹⁵ CIDH, *Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2004*, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, cap. VII, párr. 35.

En primer lugar, un principio central es el fin de la expresión. Al efecto, el Tribunal para Ruanda ha observado que para “determinar el alcance de la responsabilidad [cobra relevancia] la intención, que es el propósito de las comunicaciones”⁹⁶. En el *sub lite*, tanto Radical Radio como Radio Su-Versión, a través de la cobertura mediática del “Facebookazo”, tuvieron como finalidad incitar a una violencia inminente⁹⁷ y, bajo la excusa de que la democracia se encontraba amenazada por procesos plebiscitarios, comunicaron al oyente que “el recurso a la violencia [era] una medida necesaria y justificada”⁹⁸.

En segundo término, resulta esencial tener en cuenta “el contexto al considerar el impacto potencial de la expresión”⁹⁹. Una misma frase puede tener significados diversos en contextos diferentes: “lo que puede ser benigno en tiempos de calma (...) puede adquirir la condición de incitación en el contexto de una guerra civil”¹⁰⁰. En el marco de contiendas democráticas, y gracias al discurso virulento del locutor de Radical Radio –el Sr. Garra– retransmitido por Radio Su-Versión, decenas de iracundos manifestantes del Facebookazo se abalanzaron con palos y piedras contra la Policía, produciéndose la muerte de seis personas y más de quince heridos. Resulta evidente que ambas emisoras, a través de sus transmisiones, buscaron “agravar una situación ya explosiva”¹⁰¹.

Por último, el Tribunal para Ruanda destacó la necesidad de comprobar la existencia de una relación causal específica que vincule “la expresión en cuestión con la demostración de un efecto directo”¹⁰². La naturaleza de los medios de comunicación es tal que las acciones ilegales producto de expresiones incitadoras a la violencia –homicidios, lesiones, daños–, necesariamente, se ve afectada por una causa próxima inmediata, además de la propia

⁹⁶ TPIR, *Case of The Prosecutor v. Nahimana, Ferdinand, Barayagwiza, Jean-Bosco and Ngeze, Hassan* (Nº ICTR-99-52-T) Judgment of 3 December 2003, párr. 1001.

⁹⁷ Cfr. *Principios de Johannesburgo sobre seguridad nacional, la libertad de expresión y el acceso a la información*, aprobados por el Relator Especial para la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU.

⁹⁸ TEDH, *Case of Sürek v. Turkey (Nº 1)*. Application Nº 26682/95. Judgment of 8 July 1999, párr. 62.

⁹⁹ TPIR, *Case of The Prosecutor v. Nahimana*, cit., párr. 1004.

¹⁰⁰ CIDH, *Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2004*, cit., cap. VII, párr. 35.

¹⁰¹ TEDH, *Case of Zana v. Turkey* (69/1996/688/880) Judgment of 25 November 1997, párr. 61.

¹⁰² TPIR, *Case of The Prosecutor v. Nahimana*, cit., párr. 1007.

comunicación –que funciona como causa mediata–. Sin embargo, ello “no disminuye (...) la responsabilidad penal de los responsables de la comunicación”¹⁰³, ya que el común denominador radica en la creación de un peligro concreto y actual, “para creer que su apología de la violencia produciría una acción inmediata y grave”¹⁰⁴. El día de las elecciones, producto del discurso apologético de Radical Radio y Radio Su-Versión referido a una serie de acusaciones maliciosas por un supuesto fraude electoral –que llevó a un grupo de jóvenes a tomar por la fuerza varias urnas para prenderlas fuego– tres jóvenes murieron. Es evidente la “conexión directa e inmediata”¹⁰⁵ entre las expresiones de los responsables de las emisoras y las acciones ilegales que se desplegaron. No se trató de “meras conjeturas sobre eventuales afectaciones”¹⁰⁶ sino que, a través de su discurso, existió la posibilidad actual, real y efectiva¹⁰⁷ de “producir una anarquía inminente”¹⁰⁸. Por lo tanto, la restricción a la libertad de expresión con motivo de los actos que incitaron a la violencia resultó “perfectamente compatible con la Convención”¹⁰⁹.

Aún cuando “la imposición de una pena de prisión por una ofensa difundida en la prensa [es] compatible con la libertad de expresión (...) en los casos de discurso de odio o de incitación a la violencia”¹¹⁰, las autoridades judiciales posibilitaron a los condenados por el delito de instigación a delinquir, conmutar su pena con el pago de una multa. Ello revela la voluntad del Estado de mantener el alto umbral de protección de la libertad de expresión.

La gravedad institucional de los hechos relatados impone a Chirilagua la obligación de sancionar a sus responsables, no sólo por la pérdida lamentable de vidas humanas, sino

¹⁰³ TPIR, *Case of The Prosecutor v. Nahimana*, cit., párr. 1060 y 952

¹⁰⁴ TEDH, *Case of Okçuoğlu v. Turkey*. Judgment of 8 July 1999, voto razonado de juez Bonello.

¹⁰⁵ Cfr. *Principios de Johannesburgo*, cit.

¹⁰⁶ CIDH, *Democracia y Derechos Humanos en Venezuela*, cit., párr. 379

¹⁰⁷ Cfr. CIDH, *Democracia y Derechos Humanos en Venezuela*, cit., párr. 360. Fiss, Owen, *Liberal Democracy and the Limits of Tolerance, In Honor and Memory of Yitzhak Rabin*. R. Cohen-Almagor, ed., 2000.

¹⁰⁸ TEDH, *Case of Okçuoğlu*, cit., voto razonado del Juez Bonello.

¹⁰⁹ AA. VV. *Estudios Básicos de Derechos Humanos*, Tomo X, San José, 2000, pág. 35.

¹¹⁰ TEDH, *Case of Cumpana and Mazare v. Romania*, cit., p. 115.

también por la afectación de las instituciones democráticas¹¹¹. El “derecho al voto [como] una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la participación política”¹¹² se ha visto gravemente afectado ya que, bajo el temor generado por las presuntas víctimas, el 70% de la sociedad tuvo que abstenerse de concurrir a las urnas.

Por todo lo expuesto, Chirilagua solicita a esta Corte que declare que no es responsable internacionalmente de la violación del artículo 13 en relación con el 1.1 y 2 de la Convención.

5.b.ii) Chirilagua no violó el artículo 24 en relación con el 1.1 y 2 de la Convención

La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre parte de la premisa que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Asimismo, el artículo 24 de la Convención establece que todas las personas tienen derecho, sin discriminación alguna, a igual protección ante la ley. En este sentido, la Corte ha afirmado que el principio de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del *jus cogens*, acarreando obligaciones *erga omnes* que vinculan a todos los Estados¹¹³. Por su parte, tanto el Comité de Derechos Humanos como la Comisión han coincidido que aquel principio constituye un pilar básico de la democracia, fundamental para la protección internacional de los derechos humanos¹¹⁴.

Chirilagua, reafirmando la importancia de “garantizar el acceso al espectro radioeléctrico en condiciones de igualdad”¹¹⁵ ha desplegado en materia de telecomunicaciones “normas legales claras, preestablecidas, precisas y razonables”¹¹⁶ para la concesión y cancelación de las licencias. No obstante ello, los representantes de las presuntas víctimas han alegado que, como resultado de la cancelación de la licencia a Radical Radio y del cierre de Radio Su-

¹¹¹ Fiss, Owen. *El Efecto Silenciador de la Libertad de Expresión*. Isonomía N° 4, abril de 1996, pág. 22

¹¹² Corte IDH, *Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C N° 127, párr. 198.

¹¹³ Corte IDH, *Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados*. Opinión Consultiva OC-18/03 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 101; *Artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*. OC-20/09 29 de septiembre de 2009. Serie A No. 20, párr. 54; *Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*. OC-10/89 14 de julio de 1989. Serie A No. 10, párr. 38; *Caso Yatama*, cit. párr. 184.

¹¹⁴ Comité de Derechos Humanos, *Observación General N° 18, No-discriminación*, 10 noviembre de 1989, párr. 1. CIDH, Informe N° 4/01, Caso 11625, *M. Eugenia Morales de Sierra c. Guatemala*, 19 Enero de 2001, párr. 36.

¹¹⁵ CIDH, *Democracia y Derechos Humanos en Venezuela*, cit., párr. 460

¹¹⁶ CIDH, *Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008*, cit., párr. 82.

Versión, se ha afectado el derecho a la igualdad ante la ley de la Sra. Pereira Peroni y del Sr. Hoffman como, asimismo, de las dos emisoras. Muy por el contrario, la decisión administrativa que dispuso tales medidas, lejos de constituir una práctica discrecional de la autoridad estatal¹¹⁷, se ha fundado en criterios objetivos y razonables¹¹⁸ establecidos por la LOT. De este modo, al haberse cancelado todas las concesiones de aquellas radios que se encontraban en infracción a la ley y al cerrarse todas las emisoras ilegales que funcionaban en Chirilagua, es evidente que el accionar del Estado no ha perseguido premiar o castigar a los responsables de los medios de comunicación¹¹⁹, sino ejecutar un claro mandato legal. En otros términos, no puede vislumbrarse discriminación alguna ya que partiendo de supuestos de hecho sustancialmente diferentes¹²⁰ la distinción en el trato no ha sido arbitraria¹²¹.

Por los argumentos vertidos Chirilagua solicita a la Corte que declare que no es responsable de la violación del artículo 24 con relación al 1.1 y 2 de la Convención.

5.b.iii) Chirilagua no violó el artículo 21 en relación con el 1.1 y 2 de la Convención

El derecho a la propiedad, reconocido en el artículo 21 de la Convención, protege el uso y goce de los bienes de toda persona. Este derecho comprende de manera amplia “aquellas cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona”¹²², resultando amparados “los [bienes] muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporeales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor”¹²³. Pese a ello, la Corte ha afirmado que no se trata de un derecho absoluto¹²⁴ ya que los “Estados

¹¹⁷ Corte IDH, *Caso de las Niñas Yean y Bosico*, cit., párr. 191.

¹¹⁸ Comité de Derechos Humanos, *Observación General N° 18, No-discriminación*, cit., párr. 13.

¹¹⁹ Instituto Interamericano de Derechos Humanos. *Libertad de Expresión en las Américas*. San José de Costa Rica. 2003 p. 24. *Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión*, principio 13. *Declaración de Chapultepec*, principio 7, adoptada el 11 de marzo de 1994.

¹²⁰ Corte IDH. *Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados*, cit., párr. 89.

¹²¹ Corte IDH, Opinión Consultiva OC-4/84, *Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización*, 19 de enero de 1984, Serie A N° 4, Párrafo 57.

¹²² Corte IDH, *Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador*. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179, párr. 55; *Caso Palamara Iribarne*, cit., párr. 102 y *Caso Ivcher Bronstein*, cit., párr. 122.

¹²³ Corte IDH, *Caso de las Masacres de Ituango*, cit., párr. 174; *Caso Palamara Iribarne*, cit., párr. 102;

¹²⁴ Cfr. Corte IDH; *Caso Palamara Iribarne*, cit., párr. 108; *Caso Perozo*, cit., párr. 399.

pueden poner limitaciones (...) por razones de utilidad pública o interés social”¹²⁵, mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general.

En el particular, los representantes de las presuntas víctimas adujeron que, con la cancelación de la concesión a Radical Radio, habrían disminuido los derechos patrimoniales de la Sra. Pereira Peroni por su calidad de accionista. Si bien Chirilagua no desconoce el tratamiento “diferenciado [que merecen] los derechos de los accionistas de una empresa de los de la empresa misma”¹²⁶, debe advertirse que la revocación de la licencia se originó por un acto vedado por el artículo 92 de la LOT. Atento a que el derecho a la propiedad importa la facultad “de disponer de [los bienes] de cualquier manera legal”¹²⁷, no puede pretenderse que se reconozca afectación alguna de aquel derecho, ya que la comisión de un hecho ilícito fue lo que habilitó la intervención de la COFERETEL para la revisión de la concesión.

En lo atinente a la presunta violación del derecho a la propiedad derivado del cierre de Radio Su-Versión y de la confiscación de los equipos utilizados para las emisiones ilegales, pocas consideraciones caben realizar al respecto. Ello puesto que no siendo el Sr. Hoffman accionista de aquella emisora y habiéndose descartado la protección de los derechos de una persona jurídica bajo la Convención, sólo erróneamente podría sostenerse una vulneración del derecho de propiedad. Máxime, cuando este derecho se debe “ejercer lícitamente sobre cosas u objetos determinados”¹²⁸ para ser protegido. De este modo, una vez establecida la ilicitud del uso de los bienes confiscados, la restricción del derecho a la propiedad resulta legítima quedando desvirtuada la protección que éste confería. Entonces, una vez dispuesto el cierre de la emisora ilegal y encontrándose firme la condena del Sr. Hoffman por el delito de hurto de bienes del Estado, el decomiso de los equipos utilizados por Radio Su-Versión para la comisión de tal delito resultaba un imperativo legal.

¹²⁵ Corte IDH; *Caso Cinco Pensionistas*, cit., párr. 116.

¹²⁶ Corte IDH, *Caso Ivcher Bronstein*, cit., párr. 127. C.I.J., *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment*, February 5 1970. *General List* N° 50, p. 36, párr. 47.

¹²⁷ CIDH, Informe N° 39/96, Caso 11673, cit., párr. 26

¹²⁸ CIDH, Informe N° 39/96, Caso 11673, cit., párr. 27

Por todo lo expuesto, Chirilagua solicita a esta Corte que declare que no es responsable internacionalmente de la violación del artículo 21 en relación con el 1.1 y 2 de la Convención.

5.b.iv) Chirilagua no violó los artículos 7, 8 y 25 en relación con el 1.1 de la Convención

El artículo 8 de la Convención establece “[e]l conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales”¹²⁹, cualesquiera que ellas sean, a efecto de que las personas puedan defenderse ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos¹³⁰. Es decir, “cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”¹³¹. Esta disposición proclama las diversas garantías judiciales que deben ser observadas por los Estados, como ser, el derecho de toda persona a ser oída¹³², dentro de un plazo razonable¹³³, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial¹³⁴ constituido con anterioridad por la ley¹³⁵ y que adopte sus resoluciones de manera motivada¹³⁶. Adicionalmente, entre las garantías mínimas en materia penal¹³⁷, se establece el derecho de obtener procesos públicos y recurrir los fallos ante un tribunal superior¹³⁸.

Por su parte, el artículo 25 de la Convención consagra “la obligación a cargo de los Estados de ofrecer a todas las personas sometidas a su jurisdicción (...) recurso[s] judicial[es]

¹²⁹ Corte IDH, *Garantías judiciales en Estados de Emergencia*, cit., párr. 27

¹³⁰ Cfr. Corte IDH, *Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 31 de enero de 2001. Serie C N° 71, párr. 69. Rodríguez Rescia, Víctor, “*El Debido Proceso Legal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos*”, en AA. VV., Fix-Zamudio, Vol. II, Corte IDH, San José, 1998, p. 1296

¹³¹ Corte IDH, *Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C N° 72, párr. 124.

¹³² Cfr. Corte IDH, *Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 207, voto razonado de juez de Roux Rengifo.

¹³³ Cfr. Corte IDH, *Caso López Álvarez Vs. Honduras*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 129. Berger, Vincent, *Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme*, Sirey, Paris, 2007, pp. 391-393

¹³⁴ Cfr. Corte IDH, *Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párr. 192; *Caso Cesti Hurtado Vs. Perú*. Fondo. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C No. 56, párr. 149 y *Caso Castillo Petruzzi y otros*, cit., párr. 161.

¹³⁵ Cfr. Corte IDH, *Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C N° 206, párr. 77 y *Caso Palamara Iribarne*, cit., párr. 125.

¹³⁶ Cf. Corte IDH, *Caso Apitz Barbera y otros*, cit., párr. 78; *Caso Chaparro Álvarez*, cit., párr. 107 y *Caso Cantos Vs. Argentina*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 28 noviembre de 2002. Serie C N° 97, párr. 63.

¹³⁷ Corte IDH, *Excepciones al agotamiento de los recursos internos*, cit., párr. 28. Medina Quiroga, Cecilia. *La Convención Americana: Teoría y jurisprudencia*. Universidad de Chile, Santiago, 2003, pág. 267.

¹³⁸ Cfr. Corte IDH, *Compatibilidad de un proyecto de ley con el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*. Opinión Consultiva OC-12/91 del 6 de diciembre de 1991. Serie A N° 12.

efectivo[s] contra actos violatorios de sus derechos fundamentales”¹³⁹. Tales recursos, teniendo presente la indisociabilidad y complementariedad que existe entre las garantías de los artículos 8 y 25 de la Convención¹⁴⁰, “deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido procesal legal (...), todo ello dentro de la obligación general (...) de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención”¹⁴¹. Al efecto, el Tribunal ha afirmado que “no basta con que los recursos existan formalmente, sino es preciso que sean efectivos”¹⁴², es decir, que den respuestas a las violaciones de derechos ocasionadas y que sea efectiva su aplicación por la autoridad competente¹⁴³. La existencia de tales garantías se erige en uno de los pilares básicos “no sólo de la Convención (...), sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática”¹⁴⁴.

En el *cas d’espèce*, los procesos administrativos por los cuales se canceló la licencia a Radical Radio y se dispuso el cierre y confiscación de los equipos de Radio Su-Versión, han sido orientados por un órgano técnico autónomo. En efecto, la decisión de la COFERETEL, satisfizo las “condiciones (...) de objetividad, racionalidad y legalidad”¹⁴⁵ y su resolución ha sido “el resultado de un procedimiento administrativo (...) en el cual se garanti[zó] de manera plena el derecho al debido proceso”¹⁴⁶, al tiempo que se permitió a los presuntos afectados conocer los motivos en que se basó para adoptar su decisión. Asimismo, tanto Radical Radio

¹³⁹ Corte IDH, *Caso Barreto Leiva*, cit., párr. 103; *Caso Reverón Trujillo*, cit., párr. 59.

¹⁴⁰ Cfr. Corte IDH, *Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No 140, voto razonado de juez Cançado Trindade, párr. 29.

¹⁴¹ Corte IDH, *Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No 211, párr. 104; *Caso Kwas Fernández*, cit., párr. 110; *Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No 134, párr. 195; *Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C No 124, párr. 142; *Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 1 de marzo de 2005. Serie C No 120, párr. 76 y *Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No 109, párr. 194.

¹⁴² Corte IDH, *Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No 129, párr. 93; *Caso Tibi Vs. Ecuador*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No 114, párr. 131 y *Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No 103, párr. 117.

¹⁴³ Cfr. Corte IDH, *Caso Escher y otros*, cit., párr. 196 y *Caso Usón Ramírez*, cit., párr. 129.

¹⁴⁴ Corte IDH, *Caso Reverón Trujillo*, cit., párr. 59; *Caso Usón Ramírez*, cit., párr. 128; *Caso Tibi*, cit., párr. 131 y *Caso Castillo Páez Vs. Perú*. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No 34, párr. 82.

¹⁴⁵ Corte IDH, *Caso Claude Reyes y otros*, cit., voto razonado de juez García Ramírez, párr. 9.

¹⁴⁶ CIDH, *Democracia y Derechos Humanos en Venezuela*, cit., párr. 503

como Radio Su-Versión han podido incoar una acción de constitucionalidad en aras de lograr una pronta, sencilla y expedita¹⁴⁷ revisión de la decisión administrativa. En ambos casos, el juez ha sido competente, imparcial, independiente¹⁴⁸, y ha fallado en un plazo razonable (a los quince días desde la interposición del recurso), exteriorizando la justificación que permitió llegar a dicha conclusión¹⁴⁹. Finalmente, teniendo presente que las garantías mínimas consagradas en el artículo 8.2 de la Convención no se limitan a procesos penales¹⁵⁰, se les garantizó a los supuestos afectados el derecho de recurrir el fallo ante un juez superior.

Paralelamente a la acción de constitucionalidad se encuentra en trámite una acción de nulidad contra la decisión que, “defini[endo] derechos y deberes individuales”¹⁵¹, decretó la cancelación de la licencia a Radical Radio. El Estado, consciente que “en ciertos casos, una demora prolongada puede llegar a constituir por sí misma una violación a las garantías judiciales”¹⁵² sostiene que no se ha afectado, en lo que concierne a la acción de nulidad, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. En este sentido, tanto la Corte como el Tribunal Europeo han manifestado que la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales constituyen los elementos necesarios para determinar la razonabilidad del plazo¹⁵³. En el *sub lite*, la actividad procesal de los interesados ha sido manifiesta con relación a las diversas pruebas ofrecidas. En razón de ello, contemplando su producción a fin de garantizar el derecho de defensa en juicio¹⁵⁴ y teniendo presente las distintas etapas que se han transitado, debe concluirse que no se ha violado el plazo razonable.

¹⁴⁷ Cfr. Corte IDH, *Caso Claude Reyes y otros*, cit., párr. 137.

¹⁴⁸ Cfr. Corte IDH, *Caso Palamara Iribarne*, cit., párr. 124 y 145.

¹⁴⁹ Cfr. Corte IDH, *Caso Apitz Barbera y otros*, cit., párr. 77 y *Caso Tristán Donoso*, cit., párr. 152.

¹⁵⁰ Corte IDH, *Caso Baena Ricardo y otros*, cit., párr. 125 y 127.

¹⁵¹ Corte IDH, *Caso Claude Reyes y Otros*, cit., voto razonado de juez García Ramírez, párr. 9 y 14.

¹⁵² Corte IDH, *Caso Ricardo Canese*, cit., párr. 142.

¹⁵³ Cfr. Corte IDH, *Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 143; *Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador*. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 72 y *Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, párr. 77; TEDH, *Case of Motta v. Italy*. Sentencia 19 de febrero de 1991, Series A No. 195-A, p. 30, *Case of Ruiz-Mateos v. Spain*. Sentencia del 23 de junio de 1993, Series A No. 262, p. 30 y *Case of Baraona v. Portugal*. Sentencia 8 de julio de 1987, p. 47.

¹⁵⁴ Corte IDH, *Caso Ricardo Canese*, cit., párr. 163.

Finalmente, en el marco de una exhaustiva investigación asumida por Chirilagua seriamente “como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares”¹⁵⁵, y en virtud de las imputaciones realizadas por el Ministerio Público, la Sra. Pereira Peroni y el Sr. Hoffman, fueron condenados por los delitos de hurto de bienes del Estado, difamación e instigación a delinquir. Del mismo modo, con la convicción que “cuando se ha violado un derecho protegido, el Estado está obligado a responder *sua sponte* con determinadas medidas de investigación encaminadas a sancionar y castigar a los perpetradores”¹⁵⁶, se encontró culpable al Sr. Garra de los delitos de difamación, instigación a delinquir y homicidio de dos civiles y un policía condenándolo a doce años de prisión.

En todos los procesos penales, los jueces intervinientes han sido competentes, imparciales e independientes, se han respetado todas las garantías judiciales y se adoptaron decisiones debidamente fundamentadas¹⁵⁷ de modo que las presuntas víctimas han podido conocer los cargos que se le han imputados sustento de la sentencia condenatoria¹⁵⁸. Asimismo, se ha garantizado el derecho de recurrir el fallo ante un juez superior, tornando el acceso a la justicia en algo no meramente formal sino real¹⁵⁹ y procurando, en tiempo razonable, un control jurisdiccional para una “verdadera revisión de la sentencia [dictada]”¹⁶⁰.

En lo que refiere a la pena privativa de la libertad impuesta al Sr. Garra y al Sr. Hoffman, ella se ha fundado en “causa[les] (...) expresamente tipificadas en la ley (aspecto material) pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la

¹⁵⁵ Corte IDH, *Caso Bulacio Vs. Argentina*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 112; *Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 7 de junio de 2003. Serie C No 99 párr 144; *Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala*. Fondo. Sentencia 25 noviembre de 2000. Serie C No 70 párr 212 y *Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala*. Fondo. Sentencia 19 de noviembre 1999. Serie C No 63 pár 226.

¹⁵⁶ Corte IDH, *Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No 77, párr. 199.

¹⁵⁷ CIDH, *Estudio Especial sobre el Derecho de Acceso a la Información*. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión, 2007, párr. 95.

¹⁵⁸ Cfr. Comité de Derechos Humanos, *Observación General N° 13: Igualdad ante los tribunales y derecho de toda persona a ser oída públicamente por un tribunal competente establecido por la ley*, 13 abril de 1984, párr. 8

¹⁵⁹ Cfr. Corte IDH, *Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados*, párr. 126.

¹⁶⁰ Corte IDH, *Caso Herrera Ulloa*, cit., párr. 159.

misma (aspecto formal)”¹⁶¹, lo cual revela que Chirilagua ha respetado el derecho a su libertad personal consagrado en el artículo 7 de la Convención. Por ello, surge claramente que se ha observado el principio de legalidad¹⁶² y que la privación de la libertad no ha sido arbitraria, en tanto el afectado ha podido conocer el motivo de su detención y los cargos en su contra.

La protección judicial que reconoce la Convención comprende el derecho a procedimientos imparciales y rápidos “que brinden la posibilidad, pero nunca la garantía de un resultado favorable”¹⁶³. De este modo, la inconformidad de los representantes de las presuntas víctimas con el resultado del proceso seguido contra el Sr. Garra no puede, bajo, ninguna circunstancia, dar cabida a la pretensión de que este Tribunal se expida sobre si el locutor debió recibir una pena distinta a la que se le aplicó o si, incluso, debió ser absuelto. Muy por el contrario, Chirilagua sostiene que, en tanto quedó demostrado que en el marco del proceso seguido en contra del Sr. Garra se han respetado cabalmente las garantías y protección judiciales¹⁶⁴, no puede concluirse vulneración alguna por parte del Estado.

Por lo expuesto, el Estado solicita a la Corte que declare que Chirilagua no es responsable de la violación de los artículos 7, 8 y 25 en relación con el 1.1 de la Convención.

6. Petitorio

Por los fundamentos vertidos, el Estado solicita a la Honorable Corte que, en primer término, haga lugar a las excepciones preliminares opuestas y, subsidiariamente, declare que el Estado de Chirilagua no es responsable internacionalmente por la supuesta violación de los artículos 1.1, 2, 7, 8, 13, 21, 24 y 25 de la Convención, en perjuicio de las presuntas víctimas del presente caso, por lo que no puede reclamársele deber alguno de reparación a su cargo.

¹⁶¹ Corte IDH, *Caso Gangaram Panday Vs. Surinam*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 21 de enero de 1994. Serie C No 16, párr. 47; *Caso Durand y Ugarte*. Fondo, cit., párr. 85; *Caso Bámaca Velásquez*, cit., p. 139.

¹⁶² Cfr. Corte IDH, *La expresión “Leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*. OC-6/86 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 24 y *El Hábeas Corpus bajo suspensión de garantías* (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención) OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No 8, párr. 24.

¹⁶³ CIDH, Informe No 58/08, Caso 12122, *Armando Sosa Peceros y otros c. Perú*, 24 de julio de 2008, párr. 53; Informe No 98/06, Caso 4599, *Rita Ortiz c. Argentina*. 21 de octubre de 2006, párr. 53; Informe No 6/98, Caso 10.382, *Máximo Rodríguez c. Argentina*, 21 de febrero de 1998, párr. 71; Informe No 39/96, párr. 47

¹⁶⁴ Corte IDH; *Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 201 y *Caso de las Hermanas Serrano Cruz*, cit., párr. 58.